RECOMENDACIÓN No. 93/2018

Síntesis: Cuando transitaban, en compañía de sus respectivas parejas y una menor, a bordo de su vehículo, por concurrida calle en Cd. Juárez, se percatan de que eran seguidos por dos vehículos y con el temor de ser asaltados, pretenden huir, escuchando ahí detonaciones de armas de fuego, siendo interceptados, cuadras más adelante, por otras personas que con armas en la mano y tono amenazante los obligaron a descender de su vehículo, hecho lo cual los agreden físicamente, trasladándolos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se enteran que eran Agentes Ministeriales, los que con diversos actos de tortura* los obligan a firmar unas declaraciones en las que se les señala como extorsionadores.

Analizados los hechos y las diligencias practicadas, hay evidencias suficientes para acreditar la violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como al Acceso a la Justicia y a la Integridad y Seguridad Personal Mediante Actos de Tortura.

Oficio No. 287/20108
Expediente Número. ACT-156/2016
RECOMENDACIÓN No. 93/2018

Visitador Ponente: Lic. Alejandro Carrasco Talavera

Chihuahua, Chih., a 26 de diciembre de 2018

MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 42 y 44, de la Ley que rige este organismo, ha examinado los elementos contenidos en el expediente **JUA- ACT-156/2016**, derivado de la queja formulada por **“A”¹, “B”** y **“E”**, con motivo de los hechos que consideran violatorios a sus derechos humanos, imputados a personal adscrito a la Policía Estatal Única División Investigación, así como a las Fiscalías Especializadas de Investigación y Persecución del Delito y de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado en Zona Norte y procede a resolver atendiendo al siguiente análisis:

I.- HECHOS:

1.- Mediante oficio 2742/2016, suscrito por el Lic. Luis Alfredo Calderón Córdoba, Juez de Tribunal Oral de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, recibido en fecha 29 de abril de 2016, deducido de la causa penal **“L”**, relativo al juicio oral **“M”**, que se sigue a **“A”** y **“B”**, por el delito de Extorsión Agravada en perjuicio de **“H”**, se tuvo primer conocimiento de la reclamación formulada por aquellos en sede judicial, al solicitarse por la referida autoridad que este organismo designara peritos en materia de medicina y psicología, a efecto de que emitieran los dictámenes técnicos pertinentes a que se refiere el Protocolo

¹ Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá la publicidad de los mismos, poniéndose en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un documento anexo.

de Estambul, en relación a la manifestación que realizaron dichos acusados en torno a los actos de tortura que se adolecen.

2.- En base a lo anterior, con fecha 31 de mayo del año 2016, se procedió a la entrevista con “A”, realizada en sede del Centro de Arraigos de ciudad Juárez, documentándose la queja en la correspondiente acta circunstanciada, recabada por la Licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, Visitadora de este organismo adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social, en la cual manifestó lo siguiente:

“...que el 27 de abril del año 2012 a las 12 horas aproximadamente iba en compañía de mi esposa “C”, mi menor hija “D”, quien tenía un año de edad en ese tiempo y unos amigos de nombres “B” y su esposa “E”, íbamos a desayunar y en el camino nos empezaron a disparar, yo pensé que nos querían robar la camioneta y le di más fuerte; otra camioneta se nos emparejó y fue cuando paré porque traía a mi hija, se bajaron con las armas y nos dijeron que nos tiráramos al suelo y corriendo llegó uno de ellos y le arrebató la niña a mi esposa y otro nos empezó a pegar en la cabeza y en el cuerpo con un rifle grande y me gritó: “ya valiste verga, ya te cargó la chingada”, yo les decía: “llévate la camioneta”, se oía que llegaron más patrullas, yo no veía porque nos tenían los ojos tapados, empezaron a brincar encima de nosotros, pensaron que “B” estaba muerto ya lo tenían encobijado y a mí me gritaban: “¿dónde está el arma?” yo solo les decía: “¿cuál arma?”, en eso “B” despertó y les dijo: “¿cuál arma?”. Le empezaron a golpear y a brincar arriba de él, en eso llegaron los paramédicos y lo revisaron y le dijeron que era solo una esquirra; de ahí nos llevaron a la oficina y nos empezaron a golpear a más no poder, llegaban unos y nos daban una golpiza y llegaban otros a mí me quitaron mi ropa y me pusieron un overol blanco porque mi ropa estaba llena de sangre y me metieron a bañar y me pusieron la chicharra en mis partes bajas, en mis testículos, de ahí nos pasaron a las cámaras; antes de ahí nos dijeron lo que debíamos decir y que íbamos por extorsión y como yo les dije: “¿por qué voy a decir eso?” y me pegaron, y me dijeron que tenían a mi hija y a mi esposa le seguirían pegando, que si no quería que tenía que decir eso que yo iba por extorsión. Ya en las cámaras dije lo que ellos querían y cuando nos sacaban de ahí, me enseñaron una hoja que decía extorsión a una fulana de tal, que la amenacé, etc. Y como no quería decir eso, me metían al cuarto y me pegaban, me golpeaban y me asusté más cuando me metieron a un cuarto donde había una ventana polarizada y ahí estaban mi esposa y mi hija y pasaban y me decían que tenía que leer bien, nos pidieron el domicilio los de la fiscalía y fueron y nos robaron a nuestras casas todos los muebles, sacaron las televisiones, la sala; yo vendía cachorros y se los llevaron todos, no nos dejaron ver a un abogado, ni nos dejaron hablar con la familia, todo el tiempo nos tuvieron amarrados y vendados y nos daban golpes en la manos y en los pies y hasta que llegamos al Cereso. De hecho ahí no nos querían recibir los custodios por que llegamos muy golpeados, nos recibió el médico y puso en su informe como llegamos con los golpes en todo el cuerpo, costillas quebradas. Del Cereso nos trajeron para acá a arraigos porque el juez así lo determinó, 5 meses de arraigo domiciliario y aquí nos tienen ya llevamos un mes y medio, también quiero que se investigue eso porque el Juez dijo que era arraigo domiciliario y de hecho ya fueron a revisar nuestras casas y no nos han dicho nada...” [sic].

3.- El mismo día, 31 de mayo del año 2016 y en las instalaciones del Centro de Arraigos de aquella ciudad, se recabo queja signada por “B”, documentada en acta circunstanciada elaborada por la Licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, visitadora de este organismo, el cual manifestó lo siguiente:

“...que el día 27 de abril del año 2012 a las 12 horas aproximadamente iba en compañía de un amigo de nombre “A”, su esposa de nombre “C”, su hija “D” y mi esposa “E”. Íbamos a desayunar, estábamos en “F”, pasando por un oxxo nos marcaron el alto dos carros platinas que no eran oficiales, iban dos encapuchados en cada carro les vimos armas largas. “A” le piso a la camioneta, no sabíamos quiénes eran, 2 cuadras más adelante salieron 2 trocas atrás y dos enfrente tiraron balazos, sin identificarse ahí nos pararon y siguieron los balazos, después supe que fueron 76, y yo recibí una esquirla en mi cabeza, yo les grité que traíamos niños y dijeron que saliéramos con las manos en alto y ahí empezaron a golpearnos a todos. Yo tirado en el piso vi a “E” mi esposa, la golpearon y me quise levantar y me dieron un culetazo en mi cabeza y me desmayé. Desperté enredado en una cobija y escuché cuando un oficial le decía a “A” que “dónde traía el arma, qué onda con este güey” y contesta otro: “ya mano, ahorita lo llevamos a terreno y le damos el tiro de gracia” en eso yo me moví y vieron ellos y dijeron: “está vivo” y me dijo: “tú traías la pistola”, yo le dije: “¿cuál pistola?” y dijeron: “tú la traías”, hablaron por radio y dijeron: “ya tenemos pescados”. Siguieron golpeándonos con las puntas de sus armas largas, pataleaban y brincaban arriba de nosotros, nos apuñetearon arriba de la cabeza y ya boca abajo nos decían: “no sabes con quién te metiste” llegó otro oficial diciendo cálmense, llegó la Cruz Roja pidiendo que nos revisaran y les dijeron que sólo había sido un rozón y delante del paramédico me dieron unos bachones y nos volvieron a decir: “ya mamaron, ya van directo a la Fiscalía y ahí van a ver cómo les va a ir”. Ya en trayecto nos pisaban y nos picaban con sus largos, cuando llegamos al estacionamiento de fiscalía estaban formados y me pidieron que me abriera de piernas y me pusieron tres faules, pegándome en los testículos y me decían que me iba a mamar si me caía; cuando subí las escaleras de la fiscalía al segundo piso me caí, me desvanecí y escuché que un oficial decía: “así se despierta” me dio una patada y me echó cloralex en la boca y en la cara; atrás de mí iba “A”, nos metieron a una oficina y me hincaron, me pusieron la camisa amarrada en la cabeza y escuché una llave como de regadera y se escuchaban tronidos de la chicharra. Oí que “A” empezó a gritar porque los policías le decían: “pinche marrano te cagaste” porque “A” defecó por los golpes que le dieron en el estómago y siguieron poniéndole la chicharra, yo lo oía por que gritaba que en dónde estaba su hija y los policías contestaban de forma burlesca: “también van a mamar”. En eso se llevaron a “A” a otro lado y a mí me dejaron bastante tiempo solo, yo estaba perdiendo el conocimiento por el golpe que traía en la cabeza, por el rozón de bala y el culetazo donde me aventaron, en eso escuché los gritos de mi esposa, eran gritos de dolor, yo me sentía desvanecer, seguí escuchando gritos y silencios por parte de ella, me sacaron a otra oficina donde había 4 ministeriales y me empezaron a interrogar me dijeron que mi esposa estaba muy buena, que ya habían hecho y deshecho con ella, que hicieron lo que ellos quisieron y me preguntó que estaba dispuesto a dar en ese momento yo les dije que en mi casa tenía dinero, uno de ellos mandó a otro a mi casa y a la casa de “A”, le dijo que si entregaba el dinero dejaban libre a mi esposa, me dijeron que hablara para que entregaran el dinero y en claves habló y les dijo que el dinero lo tenía mi hermana en la casa, me pegó en los testículos y ya que le dije dónde estaba el dinero se rio y burlándose

dijo: “ya mamaste eso ya no se ve aquí” de ahí nos llevaron con la doctora y ahí estaban todos yo vi a mi esposa llena de sangre de la vagina todo manchado su pantalón; todos estaban golpeados, a la niña ya no la vi. Cuando nos revisó la doctora dijo “ya saben se cayeron de la troca”, solo a mí me revisó me puso una venda en la cabeza, en eso un oficial dijo: “también tápele los ojos”, de ahí nos vuelve a subir en las escaleras y ya en una silla me dijeron que iba a los medios de comunicación y me dijeron vas a decir que eres extorsionador me levantaron el vendaje y escuchaba a mi esposa desde otra oficina: “no digas nada”, otro de ellos ordenó que la trajeran y ahí donde yo estaba la hincaron le pusieron una bolsa en la cabeza y la golpearon hasta que se desvaneció y cada vez que ella se desvanecía le ponían los toques. Llegó el comandante de ellos y les dijo “encuérenla, quítenle la ropa” y empezaron a ultrajarla con el dedo, le empezaron a quemar su vagina, sus pezones, su lengua, ella andaba en sus días tenía sangre les decía que ya la dejaran que yo decía lo que ellos querían y en ese momento la sacaron enredada en una bata blanca y fue cuando ya no soporté más lo que a ella le hacían por eso fue que en los medios en la entrevista ya cuando nos formaron a todos junto con otras personas que yo no conocía, dentro de ellas estaba un muchacho que “A” le había llamado cuando nos detuvieron, nos pusieron: un chaleco antibalas, un traje táctico, un traje de la Comisión Federal de Electricidad, 30 celulares, radios del cual solo uno era mío, balas de escopeta, 2 armas cortas, un cuerno de chivo, 32,000 pesos en efectivo que fue la supuesta extorsión; de ahí se acercó un oficial y nos dijo los quiero calmados y ya solo harán lo que les diga, nos dijo que éramos la banda “N” que teníamos más de 163 negocios de la colonia satélite, que éramos los supuestos pegadores de la colonia. Ahí me preguntaron que a qué me dedicaba yo, como no contestaba ordenó que apagaran las cámaras y ahí me hincó y me dio una patada del lado derecho de las costillas y me sacó el aire, golpeándome delante de todos, me dijo: ¿quieres que le pase lo mismo a tu esposa?, me paré y le dije que no y volvió a ordenar que prendieran las cámaras, me dijo que estaba en vivo y me enseñó un cartel que tenía atrás que decía soy extorsionador, cuando me pasaron con los Ministerios Públicos, me metieron con uno que se llama “O”, prendió la cámara y dos oficiales que estaban ahí a un lado de él me dijeron: “va a venir un defensor, no se les ocurra decir nada, ellos están conmigo ya lo sabes, te vas a quedar a solas con el abogado” y cuando entró me dijo que si había algo que quisiera manifestar y yo le pregunté que sí que tan confiable era y el señor solo movió la cabeza por eso le dije que no tenía nada que manifestar y ahí entraron los oficiales y el Ministerio Público con varias hojas en la mano y me dijeron que las leyera y que me las aprendiera que era lo que tenía que decir, que si me equivocaba se iba a desquitar con mi esposa, ellos son el grupo de antiextorsión y contra la vida, todos eran los mismos desde que nos detuvieron. Cuando “O” prendió la cámara empezó a preguntar todo lo de la declaración, los dos oficiales atrás de la cámara y enfrente de mí me ponían lo que tenía que decir y otro me apuntaba, como yo dije “no alcanzo a leer” el Ministerio Público apagó las cámaras y me dio un puñetazo en las costillas y me dijo: “la mamaste te voy a poner más cerca para que no te equivoques”. Ahí empecé a leer y como me equivoqué el Ministerio Público apagaba la cámara y me dijo: “no te equivoques güey, ya casi acabamos” y yo como lo que ya quería era terminar por eso lo hice y ellos se soltaron riendo y en tono burlón dijeron: “ya tenemos el bono y las vacaciones”. Seguían hablando entre claves entre ellos, me llevaron a una oficina chiquita y nos juntaron a todos y platicamos lo que pasó, nos dimos cuenta que fue igual para todos, nos obligaron a hacer una declaración y a firmarla a base de amenazas diciendo que iban a ir por nuestras

familias y por nuestros hijos, nuestros papás y hermanos. En ese momento llegó el comandante y me empezó a patear las costillas diciendo que se habían equivocado en la fecha y que tenían que hacerlo todo de nuevo. Se salió enojado, en eso entró mi esposa y me dijo que los oficiales le pasaron el pene en la cara y nos dijo uno de ellos: "ya pónganse a comer, ya pónganse relax, ya pasó". Nos dijeron: "ya les dejamos sus casas vacías, hasta los perros", a mi hermana también la golpearon, le decían que era una marrana igual que yo, robaron todos los muebles en mi troca Ram verde 98 cabina y media, mis perros san bernardo, mini toy y un pit bull, mi carro Mitsubishi 2001, eran dos oficiales antirrobo. En eso entraron dos oficiales de antirrobo, uno de ellos me hincó y me dio una patada en el muslo y me pegó diciéndome: "¿dónde conseguiste el arma?", yo les dije que no era de nosotros y nos dijeron que de otro grupo les dijeron que nos habían puesto otra carpeta, nos quitó las esposas y nos dijo ya no puedo hacer nada por ustedes, los que los chingaron fueron los otros, ahí nos dejó platicando un rato. Fue todo un día y una noche, nos pusieron a disposición hasta el día 29 de abril a las 6 o 7 de la tarde, tuvieron problemas no me querían aceptar en el Ce.Re.So., y si no me aceptaban me tenían que dejar libre, los custodios dijeron que si me moría ahí la bronca iba a ser de ellos, me aceptaron después de firmar la responsiva el doctor. Yo quiero saber qué pasa con nosotros, porque el juez dijo que nos pusieran en arraigo domiciliario y nos trajeron aquí a arraigos y no nos han avisado nada del arraigo domiciliario que fue lo que ordenó el juez, es lo que yo también quiero saber ¿por qué nos tienen aquí todavía?... [sic].

4.- De igual forma, en fecha 1 de junio del año 2016, se recibió diversa reclamación formulada por "E", en sede del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado No. 2, que obra en la respectiva acta circunstanciada, elaborada por la Licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, donde se establece lo siguiente:

"...que el día 27 de abril del año 2012 yo estaba en "F" en compañía de mi esposo "B", mi primo "A" y su esposa "C", estábamos en "G". Nos detuvieron como 10 trocas de ministeriales de color gris, blanco y rojo, nos empezaron a disparar, quebraron el vidrio de atrás, cuando nos detuvimos bajaron a mi esposo "B" y lo empezaron a golpear entre todos, uno le daba con un cuerno de chivo y a mí me bajaron a golpes, me tiraron al suelo y me jalaban el cabello, me dieron una patada en la cara para que no mirara, me aventaron a la troca y me dijeron que me iban a llevar a un terreno y me iban apuntando en la sien. Llegando a fiscalía me vendaron los ojos, solo alcancé a ver que entrábamos por la parte de atrás y me subieron por unas escaleras y de ahí a un cubículo donde ya estaban otras personas hombres; yo no podía ver quién era porque yo estaba vendada, eran 4 personas que después sí reconocí como ministeriales y empezaron a hacerme tocamientos, a pasarme su pene por mi vagina y a decirme cosas obscenas como que les hiciera sexo oral, me golpearon en mi cabeza, en mi cuello, me pusieron la chicharra en mis pechos, en mis partes íntimas, en los ojos, en la lengua, me jalaban el cabello, me daba cachetadas, golpes en el estómago, me decían que si no les decía lo que ellos querían me iban a violar y a matar, pero como andaba en mis días no me pudieron penetrar pero si lo intentaron dos de ellos; yo no veía pero si sentí que me pasaban el pene por mi vagina, me pusieron una bolsa en la cabeza y como la mordí para respirar me pusieron otra bolsa encima y me desmayé. Tuvieron que despertarme, lo hicieron a golpes en las costillas en las piernas, de ahí después de esa tortura me llevaron a otro cubículo donde

me pusieron a declarar lo que ellos mismos dijeron, la declaración que ellos mismos formaron y me seguían golpeando, mujeres y hombres y como yo no quería declarar paraban la grabación, me amenazaban con que tenía que decir lo que ellos mismos querían, si no, me dijeron que me iba a ir peor, que porque ya sabían dónde estaban mis hijos y que iban a ir por ellos; ahí fue donde empecé a declarar lo que decía la hoja que me dieron, porque yo no quería que le fueran a hacer algo a mis hijos. De ahí me devolvieron al cuartito después de la declaración y cuando entré un ministerial me empezó a tocar mi cuerpo y a tomarme fotos sin brasier y sin blusa y como yo me tapaba la cara me amenazaba con ponerme la chicharra. Procedieron a llevarme a los separos de fiscalía y de ahí me sacaban a seguirme torturando, como yo ya los conocía por sus tenis porque es lo único que alcanzaba a ver porque casi siempre me tuvieron vendada y cuando me quitaron la venda fue que los reconocí y me amenazaron que no dijera que ellos habían sido que me habían torturado. Después de dos días de tortura me trasladaron al Ce.Re.So. Femenil. Aquí el médico me revisó y me encontró hematomas por todo el cuerpo, después me resultaron golpes internos que causaron las molestias en lo que viene siendo mi matriz y desde entonces mi menstruación se descontroló y me he visto muy mal por tantos golpes que me dieron en el vientre, fueron muchas las patadas y como tenía dos meses de haberme aliviado de mi hijo pequeño todavía estaba delicada...” [sic].

5.- Con fecha 16 de julio de 2016, fue notificado el oficio número CJ ACT 356/2016, mediante el cual el licenciado Alejandro Carrasco Talavera, solicitó a la Fiscalía los informes de ley. El día 26 de agosto de 2016, se recibe el informe de la autoridad mediante número de oficio FEAVOD/UDH/CEDH/1767/2016, signado por el Licenciado Fausto Javier Tagle Lachica, en ese momento Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, en el cual manifiesta en lo medular, lo siguiente:

II-. Hechos motivo de la queja.

Del contenido del escrito de queja, se desprende que los hechos motivo de la misma, se refieren específicamente a alegados actos relacionados con la supuesta violación al derechos a la integridad y seguridad personal, en específico las consistentes en tortura acontecidos al momento de la detención y en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona norte, y atribuidos a agentes de la Policía Estatal Única, División Investigación.

En este sentido, el presente informe se concentra exclusivamente en la dilucidación de esto hechos en consonancia con lo solicitado por el Garante Local y lo establecido en la Ley y Reglamento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

III. Actuación oficial.

De acuerdo con la información reciba por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, relativo a la queja interpuesta por “A”, “B” y “E”, se informan las actuaciones realizadas por la autoridad dentro de la carpeta de investigación “I”.

1. El 25 de abril de 2012 acude a la Fiscalía General del Estado “H” a efecto de informar que el día 24 de abril de 2012 llegaron a su consultorio dos sujetos, quienes la

amenazaron con un arma de fuego y le exigieron la cantidad tres mil dólares por derecho de piso o cuota, o de lo contrario le harían daño, asimismo informó que el día 27 de abril de 2012 llegarían los extorsionadores por el dinero.

2. El 27 de abril del 2012 agentes investigadores de la Policía Estatal Única, División Investigación elaboraron reporte policial en el que en lo medular informaron que en tal fecha “H” se comunicó telefónicamente con elementos de la Unidad de Atención al Delito de Extorsión y refirió que en tal fecha se llevaría a cabo la entrega de treinta mil pesos a los extorsionadores por el cobro de derecho de piso, por lo cual los agentes procedieron a realizar un operativo en los alrededores e interior del lugar en el que se realizaría el pago, en espera de los sujetos activos en el delito, y siendo cerca de las 11:40 horas del día los agentes pudieron observar que hasta el lugar de pago llegó un vehículo Grand Caravan marca Dodge, tipo minivan, cinco puertas, sin matriculas, en color blanco, modelo aproximado 2000, tripulado por cuatro o cinco personas, el cual se estacionó en el exterior del local, se asomó la víctima y le entregó a dicho sujeto un segmento de un periódico, en el cual en su interior contenía un sobre tipo manila y en su interior la cantidad de treinta mil pesos, según lo informado por los agentes que se encontraban en el interior del local; una vez que el sujeto tuvo el paquete en sus manos volvió a subir al vehículo, pero esta vez del lado del copiloto, y el vehículo se puso en marcha con rumbo al norte, por lo que los agentes inmediatamente abordaron uno de los vehículos y se les marcó el alto audible y visible, identificándose en forma plena como agentes de la policía ministerial con los tripulantes del vehículo tipo minivan, los agentes narran que la reacción del conductor de la minivan fue acelerar la marcha, haciendo caso omiso a la orden proporcionada, fue en ese momento que del lado del copiloto por la ventana del vehículo, la misma persona que realizó el cobro, sacó un arma larga al parecer un cuerno de chivo (AK-47), apuntando a los agentes, quienes al ver la acción y sentir amenazadas sus vidas en integridad física comenzaron a realizar disparos a los neumáticos del vehículo para tratar de neutralizar a la persona que en ese momento les apuntaba con el arma de fuego, logrando así detener la marcha del vehículo sobre las calles “J”; al detenerse el sujeto que iba sentado del lado del copiloto descendió y caminó hasta la parte trasera del vehículo donde tiró su arma y dijo llamarse “A”; los agentes procedieron a solicitar a los otros tripulantes que descendieran, bajando del lado del piloto “B” y de la parte de atrás dos mujeres “C” y “E” quien cargaba a su menor hija “D”; los agentes realizaron las respectivas entrevistas simultáneamente y al finalizar advirtieron por los hechos observados que efectivamente dichas personas se encontraban en flagrante delito de extorsión, por lo que se procedió a la detención de los mismos, sin embargo señalan los agentes que los imputados opusieron resistencia a la detención, teniendo que utilizar técnicas policiales para su arresto. Una vez logrado procedieron a dar lectura a sus derechos siendo las 12:15 horas del día en mención, en el cruce de la calle “J” asimismo asentaron los agentes el reporte policial que apreciaron en los detenidos “A” y “B” un sangrado en la parte trasera de sus cabezas, motivo por el cual se solicitó el auxilio por medio de radio frecuencia para pedir atención médica, misma que fue brindada por parte de elementos de la Cruz Roja; posteriormente se realizaron los aseguramientos correspondientes y los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte con la finalidad de ser puestos a disposición del Ministerio Público.

3. Obran actas de lectura de derechos realizadas el día 27 de abril de 2012 por agentes investigadores de la Policía Estatal única a “A”, “B” y “E”.
4. Obra nombramiento de defensor realizado el 27 de abril de 2012 por el Ministerio Público a “E”, aceptando el cargo conferido la licenciada Marisela Sáenz Moriel.
5. Obra nombramiento de defensor realizado el 27 de abril de 2012 por el Ministerio Público a “B”, aceptando el cargo conferido el licenciado Jesús Raymundo Mendoza Flores.
6. Obra nombramiento de defensor realizado el 27 de abril del 2012 por el Ministerio Público a “A”, aceptando el cargo conferido el licenciado Jesús Raymundo Mendoza Flores.
7. El 29 de abril de 2012 el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación y Combate del Delito de Extorsión solicitó el traslado de “A”, “B” y “E” al Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 a efecto de ser puestos a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos para la celebración de la audiencia de control de detención.
8. Obra dentro de la carpeta de investigación oficio No. 201/14 dirigido a la Coordinadora de la Unidad de Investigación en Delitos contra el Servicio Público mediante el cual se hace del conocimiento que de las declaraciones rendidas por los acusados “A”, “B” y “E” se desprende la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos de tortura, amenazas y robo, señalando como responsables a los agentes de la Policía Ministerial Investigadora, por lo cual se solicitó el inicio de la investigación correspondiente.
9. El 24 de febrero del 2014 se dio inicio a la audiencia de debate de Juicio Oral ante el Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, en la cual se valoraron los órganos de prueba ofertados tanto por la representación social como por la defensa de los imputados, y el 14 de abril del 2014 se dictó sentencia condenatoria en contra de “A”, “B” y “E”, al considerarse penalmente responsables de la comisión del delito de extorsión con penalidad agravada, imponiéndoseles una pena de prisión vitalicia.
10. La sentencia fue recurrida por la defensa de los imputados dentro del toca “K”, mismo que fue resuelto en fecha 28 de enero de 2015, confirmando la sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad.
11. El 23 de febrero de 2015 se recibió notificación de la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia, a través del cual informaron que los imputados “A”, “B” y “E” interpusieron demanda de amparo directo, en el que señalan como acto reclamado la resolución emitida por el tribunal de Alzada en fecha 28 de enero de 2015; concediendo el Tribunal Colegiado el Amparo y Protección de la Justicia Federal, lo que dejó sin efectos la audiencia de debate de juicio oral “L” y se ordena la práctica del Protocolo de Estambul a los imputados “A”, “B” y “E”.
12. Actualmente se está en espera del resultado del Protocolo de Estambul para que se fije nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de debate de juicio oral.

IV. Premisas Normativas.

Del marco normativo aplicable al presente caso, particularmente de la investigación de los hechos denunciados, podemos establecer como premisas normativas incontrovertibles que:

1) El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

2) El artículo 21 de nuestra Carta Magna establece en sus párrafos primero y segundo que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo el mando y conducción de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

3) El artículo 106 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua señala que el Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos en materia de la denuncia o querrela.

4) Señala el artículo 114, fracciones, I y V, del Código de Procedimientos Penales, como facultades de la Policía Investigadora, recibir noticias de los hechos presuntamente constitutivos del delito, recopilar información de los mismos, y entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.

5) El artículo 165 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chihuahua, nos menciona que se encuentran en situación de flagrancia respecto de un hecho delictivo, a quien se sorprenda cometiendo el mismo o bien que tomando en cuenta las circunstancias del mismo, permitan presumir, que la persona que se detiene se encuentra involucrada en el delito.

6) El Código de Procedimientos Penales del Estado en su artículo 210 señala que la etapa de investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querrela, para que mediante la obtención de información y recolección de elementos se pueda determinar si hay un fundamento para abrir un juicio oral; esta etapa de investigación estará a cargo del Ministerio Público.

V. Anexos.

Aunando al principio de buena fe que rige la actuación de los entes públicos, a fin de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuente con el suficiente respaldo documental dentro de su investigación, me permito anexar la siguiente información:

(1) Copia de los informes médicos de integridad física realizados a “A” y a “B” el día 27 de abril de 2012.

(2) Copia del oficio No. 201/14 mediante el cual se informó a la Coordinadora de la Unidad de Investigación en Delitos contra el Adecuado Desarrollo del Servicio Público de la probable comisión de hechos constitutivos de delito.

No omito manifestarle que el contenido de los anexos es de información de carácter confidencial, por lo tanto me permito solicitarle que la misma sea tratada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

VI. Conclusiones

A partir de la especificación de los hechos motivo de la queja y habiendo precisado la actuación oficial a partir de la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y con base en las premisas normativas aplicables al caso concreto, podemos establecer válidamente las siguientes conclusiones:

Como se desprende del presente informe, los hoy quejosos fueron detenidos el día 27 de abril de 2012 en el término de la flagrancia por su probable participación en el delito de extorsión por agentes investigadores de la Policía Estatal Única, quienes asentaron en su parte informativo que momentos antes de la detención se inició persecución, en la que uno de los quejosos sacó un arma de fuego de alto calibre y les apuntó poniendo en amenaza su vida e integridad física, asimismo asentaron que al momento de la detención los quejosos se opusieron al arresto, por lo que fue necesario el uso de la fuerza pública mediante técnicas policiales de arresto; por lo anterior se desestiman las manifestaciones hechas por los quejosos ya que se desprende que el actuar del Agente Policial, no corresponde a una conducta antijurídica sino a una técnica policial, toda vez que este actúa en ejercicio de sus funciones y por motivo de estas, existe una causa de justificación ante una situación de racionalidad y estricta necesidad, que en su caso, permite y justifica el uso de la fuerza, ya que el Agente obra bajo el amparo del cumplimiento de su deber, por lo que la actuación de la autoridad fue legítima, toda vez que el agente se dio a la tarea de proteger su propia vida e integridad física y evitar que los probables responsables realizaran el acto de sustracción de la justicia.

No obstante lo anterior, cabe señalar que los hoy quejosos interpusieron demanda de amparo directo, en el que señalan como acto reclamado la resolución emitida por el tribunal de Alzada en fecha 28 de enero de 2015; concediendo el Tribunal Colegiado el Amparo y Protección de Justicia Federal, lo que dejó sin efectos la audiencia de debate de juicio oral "L" y se ordenó la práctica del Protocolo de Estambul a los imputados "A" y "B". Actualmente se está en espera del resultado del Protocolo de Estambul para que se fije nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de debate de juicio oral.

Asimismo se informa mediante oficio No. 201/14 dirigido a la Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Servicio Público, se hizo del conocimiento que las declaraciones rendidas por los acusados "A", "B" y "E" se desprende la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos de Tortura, Amenazas y Robo, señalando como probables responsables a agentes de la Policía Ministerial investigadora, por lo cual se solicitó el inicio de la investigación correspondiente.

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 del capítulo V del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual menciona que los expedientes de queja que hubieren sido abiertos, podrán ser concluidos por diversas causas, siendo una de ellas la señalada en la fracción VII, misma que versa respecto a la conclusión por haberse solucionado la queja mediante la conciliación, o bien durante el trámite respectivo; ordenando el diverso numeral 77, que los expedientes de

queja serán formalmente concluidos mediante la firma del acuerdo correspondiente del visitador que hubiere conocido de los mismos. En los acuerdos se establecerán con toda claridad las causas de conclusión de los expedientes, así como sus fundamentos legales.

Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes de queja iniciados por supuesta Tortura, Abuso de Autoridad o Uso ilegal de la Fuerza Pública, en los cuales ya se dio inicio a la investigación correspondiente por parte del Agente del Ministerio Público, y se hizo del conocimiento (mediante informe correspondiente) del visitador que tramita la misma, se solicita, en base a los numerales previamente referidos, sea ordenado el archivo de la referida queja, por haberse dado solución a la misma durante el trámite.

Con base a lo anterior, podemos concluir que bajo el estándar de apreciación del Sistema de Protección no Jurisdiccional, no se tiene por acreditada ninguna violación a los derechos humanos que sea atribuible a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado, por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, reafirma su decidido compromiso con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos...” [sic].

6.- Con motivo de lo anterior, este organismo inició el expediente de queja JUC-ACT-156/2016, instruyéndose todas y cada una de las diligencias que por ley resultaron procedentes y aquellas que se consideraron atinentes para allegarse de los elementos de convicción que permitieran emitir un pronunciamiento, decretándose el cierre de la investigación, por acuerdo del 27 de septiembre de 2017, razón por la cual se procede a enunciar las siguientes:

II. - EVIDENCIAS:

7.- Oficio No. 2742/2016 recibido el 29 de abril de 2016, signado por el Licenciado Luis Alfredo Calderón Córdova, Juez de Tribunal Oral de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, dirigido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mediante el cual se solicita la designación de peritos (en medicina y psicología), para la aplicación del Protocolo de Estambul a dos de los quejosos (Foja 1).

8.- Acta circunstanciada donde obra la queja formulada por “**A**”, el 31 de mayo de 2016, elaborada por la Licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, mediante la cual se hace del conocimiento de esta Comisión hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, la cual se encuentra transcrita en el apartado número 2 del capítulo de hechos de la presente recomendación (Fojas 4 y 5).

9.- Queja presentada por “**B**”, en la misma fecha, recabada por la Licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, mediante la cual se hace del conocimiento de esta Comisión hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, la cual se encuentra transcrita en el apartado número 3 del capítulo de hechos de la presente recomendación (Fojas 6 a 9).

10.- Queja signada por “E”, que consta en la correspondiente acta circunstanciada de fecha 1 de junio de 2016, recabada por la licenciada Carmen Gorety Gandarilla Hernández, donde se reclaman ante esta comisión hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, la cual se encuentra transcrita en el apartado número 4 del capítulo de hechos de la presente recomendación (Fojas 10 y 11).

11.- Oficio No. CJ ACT 367/2016 de fecha 23 de junio de 2016, signado por el Licenciado Alejandro Carrasco Talavera, Visitador General de este organismo, mediante el cual solicita al Licenciado Édgar Pineda Ramírez, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, la implementación del denominado “Protocolo de Estambul” a los quejosos “A”, “B” y “E” (Fojas 16 y 17).

12.- Oficio DECH/2266/2016 recibido el 29 de junio de 2016, suscrito por el Licenciado Edgar Pineda Ramírez, en su carácter de Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se hace del conocimiento de esta comisión la solicitud de colaboración al Encargado Estatal de la Coordinación de Servicios Periciales de la citada dependencia, para la práctica del denominado “Protocolo de Estambul” a los quejosos “A”, “B” y “E” (Fojas 20 y 21).

13.- Oficio AIC/CEPS/CHIH/1297/2016 recibido el 8 de julio de 2016, rubricado por Ingeniero Miguel Montiel Romero, en su carácter de Encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Chihuahua, adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, por el cual expresa su imposibilidad de practicar los estudios solicitados en el oficio que antecede (Foja 22 y 23).

14.- Informe contenido en el oficio FEAVOD/UDH/CEDH/1767/2016 recibido el 26 de agosto de 2016, remitido por el Licenciado Fausto Javier Tagle Lachica, en ese momento Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, mismo que ha quedado transcrito en el punto 5 del capítulo de hechos de esta recomendación (Fojas 25 a 34), el cual cuenta con los siguientes anexos:

14.1.- Copia simple del informe médico de integridad física de fecha 27 de abril de 2012 practicado a “B” (Foja 35).

14.2.- Copia simple del informe médico de integridad física de fecha 27 de abril de 2012, practicado a “A” (Foja 36).

14.3.- Copia simple del oficio 201/2014 dirigido a la Coordinadora de la Unidad de Investigación en Delitos Contra el Adecuado Servicio Público (Fojas 37 38).

15.- Evaluación psicológica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes practicado a “E” por la Licenciada Gabriela González Pineda, Psicóloga adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, contenida en el oficio GG 119/2016 de fecha 6 de octubre de 2016 (Fojas 41 a 50).

16.- Evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y denigrantes practicada a “A”, en fecha 13 de diciembre de 2016 y recibida el 21 de marzo de 2017, elaborada por el Doctor Ricardo Humberto Márquez Jasso, médico adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Fojas 64 a 69).

17.- Evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y denigrantes practicada a “E” el 27 de enero de 2017 y recibida el 21 de

marzo de 2017, elaborada por el Doctor Ricardo Humberto Márquez Jasso, médico adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Fojas 70 a 74).

18.- Informe complementario rendido mediante oficio No. UDH/CEDH/475/2017 recibido el 17 de marzo de 2017, signado por la Licenciada Bianca Vianey Bustillos González, funcionaria adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Litigio Internacional de la Fiscalía General del Estado (Fojas 75 a 77), mediante el cual proporciona copia a solicitud del visitador ponente, de los siguientes documentos:

18.1.- Copia simple del informe de integridad física realizado a “E” en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en fecha 27 de abril de 2012 (Foja 78).

18.2.- Copia simple del certificado médico de ingreso realizado a “E” en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en fecha 29 de abril de 2012 (Foja 79).

18.3.- Copia simple del certificado médico de ingreso realizado a “B” en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en fecha 29 de abril de 2012 (Foja 80).

18.4.- Copia simple del certificado médico de ingreso realizado a “A” en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en fecha 10 de octubre de 2015 (Foja 81).

19.- Evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y denigrantes practicada a “B” el 26 de enero de 2017, por el Doctor Ricardo Humberto Márquez Jasso, médico adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Fojas 85 a 90).

20.- Oficio No. GG 63/2017 de fecha 6 de septiembre de 2017, signado por la Licenciada Gabriela González Pineda, Psicóloga adscrita a este organismo, mediante el cual informa que el quejoso “A” no aceptó se le realizará valoración psicológica (Fojas 93 y 94).

21.- Evaluación psicológica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes practicados a “B” mediante entrevista del 6 de septiembre 2017, remitida por la Licenciada Gabriela González Pineda, psicóloga adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Fojas 95 a 103).

III.- CONSIDERACIONES:

22.- Esta Comisión Estatal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6 fracción II inciso a), de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 12 del Reglamento Interior que rige su funcionamiento, corresponde a este organismo, conocer e investigar presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones, de carácter administrativo, provenientes de autoridades estatales y municipales.

23.- Lo procedente ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 42, de la Ley en la materia, es analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o los servidores públicos involucrados, han violado o no los derechos humanos de “**A**”, “**B**” y “**E**”, al haber incurrido en omisiones o actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto, de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda la Constitución mexicana, para una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la indagatoria que hoy nos ocupa.

24.- Previo al estudio de las violaciones a derechos humanos presuntivamente cometidas en agravio de “**A**”, “**B**” y “**E**”, este organismo precisa que carece de competencia para conocer de asuntos jurisdiccionales, así como para calificar las actuaciones judiciales, en términos de los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción II, y 8, última parte, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y 17 de su Reglamento Interno; por lo cual no se pronuncia sobre las actuaciones judiciales, ni la causa penal incoada a los quejosos, respecto a la probable responsabilidad penal que se les imputa, por lo que sólo se referirá al análisis de actos u omisiones de naturaleza administrativa de las que se desprendan presuntas violaciones a derechos humanos.

25.- De la manifestación de los quejosos se advierte de la causa de pedir, que se duelen de lo siguiente:

I).- Tortura, como especie del derecho a la integridad y seguridad personal, que consiste en la obtención de una declaración inculpativa o firma de alguna constancia mediante la imposición de tratos crueles e inhumanos, causación de lesiones, intimidación o amenazas.

II).- Robo y/o desposeimiento indebido de bienes muebles, consistentes en un vehículo, enseres domésticos y animales que criaban para su venta, sin que se haya registrado su aseguramiento en los términos de ley.

III.- Prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Arraigos de ciudad Juárez, sustitutivo del “arraigo en domicilio” decretado por el juez de la causa, al haberse excedido el plazo de dos años, sin que se haya dictado sentencia, como especie del derecho de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad.

26.- Aunque propiamente no constituye el quid primordial de la reclamación, empero de la causa de pedir se advierte que los quejosos aluden a que su detención se dio sin causa aparente alguna, que los varones, en compañía de sus respectivas parejas y una menor, hija de “**A**” y “**C**”, transitaban por “**F**” a bordo de un vehículo automotor que también les fue asegurado, cuando después de realizar algunas compras, se dirigían a desayunar y

en eso notaron que eran perseguidos por diversos vehículos y que al concluir que les querían causar algún daño, emprendieron la huida, hasta que fueron interceptados por agentes de policía a bordo de varias camionetas que se les cerraron el camino, que inclusive les realizaron algunos disparos de armas de fuego, provocando que una esquirla le causara una herida superficial en el cráneo a **“B”**.

27.- Al análisis de éste punto, del cual deriva desde luego lo relativo a la tortura y demás consecuencias aludidas, la autoridad responsable, por conducto del titular de la Fiscalía Especializada mencionada, establece en su informe contenido en el oficio número FEAVOD/UDH/CEDH/1767/2016, en el capítulo III, relativo a actuación oficial y VI, referente a las conclusiones, que:

*“...El 27 de abril del 2012 agentes investigadores de la Policía Estatal Única, División Investigación elaboraron reporte policial en el que en lo medular informaron que en tal fecha **“H”** se comunicó telefónicamente con elementos de la Unidad de Atención al Delito de Extorsión y refirió que en tal fecha se llevaría a cabo la entrega de treinta mil pesos a los extorsionadores por el cobro de derecho de piso, por lo cual los agentes procedieron a realizar un operativo en los alrededores e interior del lugar en el que se realizaría el pago, en espera de los sujetos activos en el delito, y siendo cerca de las 11:40 horas del día los agentes pudieron observar que hasta el lugar de pago llegó un vehículo Grand Caravan marca Dodge, tipo minivan, cinco puertas, sin matriculas, en color blanco, modelo aproximado 2000, tripulado por cuatro o cinco personas, el cual se estacionó en el exterior del local, se asomó la víctima y le entregó a dicho sujeto un segmento de un periódico, en el cual en su interior contenía un sobre tipo manila y en su interior la cantidad de treinta mil pesos, según lo informado por los agentes que se encontraban en el interior del local; una vez que el sujeto tuvo el paquete en sus manos volvió a subir al vehículo, pero esta vez del lado del copiloto, y el vehículo se puso en marcha con rumbo al norte, por lo que los agentes inmediatamente abordaron uno de los vehículos y se les marcó el alto audible y visible, identificándose en forma plena como agentes de la policía ministerial con los tripulantes del vehículo tipo minivan, los agentes narran que la reacción del conductor de la minivan fue acelerar la marcha, haciendo caso omiso a la orden proporcionada, fue en ese momento que del lado del copiloto por la ventana del vehículo, la misma persona que realizó el cobro, sacó un arma larga al parecer un cuerno de chivo (AK-47), apuntando a los agentes, quienes al ver la acción y sentir amenazadas sus vidas en integridad física comenzaron a realizar disparos a los neumáticos del vehículo para tratar de neutralizar a la persona que en ese momento les apuntaba con el arma de fuego, logrando así detener la marcha del vehículo sobre las calles **“J”**; al detenerse el sujeto que iba sentado del lado del copiloto descendió y caminó hasta la parte trasera del vehículo donde tiró su arma y dijo llamarse **“A”**; los agentes procedieron a solicitar a los otros tripulantes que descendieran, bajando del lado del piloto **“B”** y de la parte de atrás dos mujeres **“C”** y **“E”** quien cargaba a su menor hija **“D”**; los agentes realizaron las respectivas entrevistas simultáneamente y al finalizar advirtieron por los hechos observados que efectivamente dichas personas se encontraban en flagrante delito de extorsión, por lo que se procedió a la detención de los mismos...” [sic].*

27.1.- A guisa de conclusiones, se expresa que:

A partir de la especificación de los hechos motivo de la queja y habiendo precisado la actuación oficial a partir de la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, así con los datos encontrados en la base de datos de esta Institución y con fundamento en las premisas normativas aplicables al caso concreto, podemos establecer válidamente las siguientes conclusiones.

“...Como se desprende del presente informe, los hoy quejosos fueron detenidos el día 27 de abril de 2012 en el término de la flagrancia por su probable participación en el delito de extorsión por agentes investigadores de la Policía Estatal Única, quienes asentaron en su parte informativo que momentos antes de la detención se inició persecución, en la que uno de los quejosos sacó un arma de fuego de alto calibre y les apuntó poniendo en amenaza su vida e integridad física, asimismo asentaron que al momento de la detención los quejosos se opusieron al arresto, por lo que fue necesario el uso de la fuerza pública mediante técnicas policiales de arresto; por lo anterior se desestiman las manifestaciones hechas por los quejosos ya que se desprende que el actuar del Agente Policial, no corresponde a una conducta antijurídica sino a una técnica policial, toda vez que este actúa en ejercicio de sus funciones y por motivo de estas, existe una causa de justificación ante una situación de racionalidad y estricta necesidad, que en su caso, permite y justifica el uso de la fuerza, ya que el Agente obra bajo el amparo del cumplimiento de su deber, por lo que la actuación de la autoridad fue legítima, toda vez que el agente se dio a la tarea de proteger su propia vida e integridad física y evitar que los probables responsables realizaran el acto de sustracción de la justicia...” (sic)

28.- Aunque se advierte una contradicción entre ambas versiones, en cuanto a la causa o motivo de la detención de que fueron objeto los quejosos, que no es compatible con la versión de la autoridad, sin entrar a la calificación de la misma en base a los argumentos que a continuación se exponen, ésta tiene su justificación y asidero legal, en lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su quinto párrafo que preceptúa: Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

29.- Tampoco encuentra reproche la actuación de la autoridad a la luz de los principios de derechos humanos, atento lo prescrito en los dispositivos 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que estipulan los derechos a la libertad personal y las garantías judiciales, al establecer que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

30.- Por lo anterior, se concluye que la detención de los quejosos tiene la presunción de estar ajustada a derecho, virtud a que se dio con motivo de hechos probablemente constitutivos de delito, ya que la autoridad policial, a efecto de garantizar la seguridad de las personas, puede llevar a cabo la detención de individuos que se encuentren en este supuesto, es decir, que sean sorprendidos al momento de estar realizando hechos que puedan tener esta connotación, de donde deviene legal y jurídicamente justificada la detención de los mencionados, al ser señalados por la persona afectada o víctima del delito de extorsión.

31.- Por lo que después de su detención, la cual se encuentra justificada, al ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, incumbe a ésta controlar su detención, mediante la calificación en principio, para luego ratificarla o revocarla, lo que ocurrió en tiempo y forma, toda vez que los reclamos de tortura se dieron precisamente ante ésta, razón por la cual el análisis y calificación de la detención en sede derecho humanista no es posible revalorarla.

32.- Sin embargo persiste el reclamo de la imposición de agresiones físicas y psicológicas constitutivas de actos de tortura, después de la detención precitada y durante el tiempo que los quejosos estuvieron a disposición de los elementos de la Policía Estatal Única División Investigación, al referir que en las instalaciones de la fiscalía, sin precisar por cuanto tiempo estuvieron en dicha locación, antes de ser trasladados al Centro de Reinserción Social Estatal No. 3, donde refieren que no los querían admitir por las lesiones que presentaban, lapso en el cual los quejosos refieren que les fueron impuestos los actos de tortura mencionados, a afecto de obtener la autoinculpación en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, cuando afirma “**A**”, conforme al párrafo 2: “...de ahí nos llevaron a la oficina y nos empezaron a golpear a más no poder, llegaban unos y nos daban una golpiza y llegaban otros a mí me quitaron mi ropa y me pusieron un overol blanco porque mi ropa estaba llena de sangre y me metieron a bañar y me pusieron la chicharra en mis partes bajas, en mis testículos, de ahí nos pasaron a las cámaras; antes de ahí nos dijeron lo que debíamos decir y que íbamos por extorsión y como yo les dije: “¿por qué voy a decir eso?” y me pegaron, y me dijeron que tenían a mi hija y a mi esposa le seguirían pegando, que si no quería

que tenía que decir eso que yo iba por extorsión. Ya en las cámaras dije lo que ellos querían y cuando nos sacaban de ahí, me enseñaron una hoja que decía extorsión a una fulana de tal, que la amenacé, etc. Y como no quería decir eso, me metían al cuarto y me pegaban, me golpeaban y me asusté más cuando me metieron a un cuarto donde había una ventana polarizada y ahí estaban mi esposa y mi hija y pasaban y me decían que tenía que leer bien...todo el tiempo nos tuvieron amarrados y vendados y nos daban golpes en la manos y en los pies y hasta que llegamos al Cereso. De hecho ahí no nos querían recibir los custodios por que llegamos muy golpeados, nos recibió el médico y puso en su informe como llegamos con los golpes en todo el cuerpo, costillas quebradas...”

33.- Por su parte “**B**”, en cuanto a éste punto se refiere, dice: “... nos decían, ya mamaron, ya van directo a la fiscalía y ahí van a ver cómo les va a ir”. Ya en trayecto nos pisaban y nos picaban con sus largos, cuando llegamos al estacionamiento de fiscalía estaban formados y me pidieron que me abriera de piernas y me pusieron tres faules, pegándome en los testículos y me decían que me iba a mamar si me caía; cuando subí las escaleras de la fiscalía al segundo piso me caí, me desvanecí y escuché que un oficial decía: “así se despierta” me dio una patada y me echó cloralex en la boca y en la cara; atrás de mí iba “**A**”, nos metieron a una oficina y me hincaron, me pusieron la camisa amarrada en la cabeza y escuché una llave como de regadera y se escuchaban tronidos de la chicharra. Oí que “**A**” empezó a gritar porque los policías le decían: “pinche marrano te cagaste” porque “**A**” defecó por los golpes que le dieron en el estómago y siguieron poniéndole la chicharra, yo lo oía por que gritaba que en dónde estaba su hija y los policías contestaban de forma burlesca: “también van a mamar”. En eso se llevaron a “**A**” a otro lado y a mí me dejaron bastante tiempo solo, yo estaba perdiendo el conocimiento por el golpe que traía en la cabeza, por el rozón de bala y el culetazo donde me aventaron, en eso escuché los gritos de mi esposa, eran gritos de dolor, yo me sentía desvanecer, seguí escuchando gritos y silencios por parte de ella, me sacaron a otra oficina donde había 4 ministeriales y me empezaron a interrogar me dijeron que mi esposa estaba muy buena, que ya habían hecho y deshecho con ella, que hicieron lo que ellos quisieron y me preguntó que estaba dispuesto a dar en ese momento yo les dije que en mi casa tenía dinero, uno de ellos mandó a otro a mi casa y a la casa de “**A**”, le dijo que si entregaba el dinero dejaban libre a mi esposa, me dijeron que hablara para que entregaran el dinero y en claves habló y les dijo que el dinero lo tenía mi hermana en la casa, me pegó en los testículos y ya que le dije dónde estaba el dinero se rio y burlándose dijo: “ya mamaste eso ya no se ve aquí” de ahí nos llevaron con la doctora y ahí estaban todos yo vi a mi esposa llena de sangre de la vagina todo manchado su pantalón; todos estaban golpeados, a la niña ya no la vi. Cuando nos revisó la doctora dijo “ya saben se cayeron de la troca”, solo a mí me revisó me puso una venda en la cabeza, en eso un oficial dijo: “también tápele los ojos”, de ahí nos vuelve a subir en las escaleras y ya en una silla me dijeron que iba a los medios de comunicación y me dijeron vas a decir que eres extorsionador me levantaron el vendaje y escuchaba a mi esposa desde otra oficina: “no digas nada”, otro de ellos ordenó que la trajeran y ahí donde yo estaba la hincaron le pusieron una bolsa en la cabeza y la golpearon hasta que se desvaneció y cada vez que ella se desvanecía le ponían los toques. Llegó el comandante de ellos y les dijo “encuérenla, quítenle la ropa” y empezaron a ultrajarla con el dedo, le empezaron a quemar su vagina, sus pezones, su lengua, ella andaba en sus días tenía sangre les decía que ya la dejaran que yo decía lo que ellos querían y en ese momento la sacaron enredada en una bata blanca y fue cuando ya no soporté más lo que a ella le hacían...”

34.- En tanto que “E” refiere lo siguiente: *“...Llegando a fiscalía me vendaron los ojos, solo alcancé a ver que entrábamos por la parte de atrás y me subieron por unas escaleras y de ahí a un cubículo donde ya estaban otras personas hombres; yo no podía ver quién era porque yo estaba vendada, eran 4 personas que después sí reconocí como ministeriales y empezaron a hacerme tocamientos, a pasarme su pene por mi vagina y a decirme cosas obscenas como que les hiciera sexo oral, me golpearon en mi cabeza, en mi cuello, me pusieron la chicharra en mis pechos, en mis partes íntimas, en los ojos, en la lengua, me jalaban el cabello, me daba cachetadas, golpes en el estómago, me decían que si no les decía lo que ellos querían me iban a violar y a matar, pero como andaba en mis días no me pudieron penetrar pero si lo intentaron dos de ellos; yo no veía pero si sentí que me pasaban el pene por mi vagina, me pusieron una bolsa en la cabeza y como la mordí para respirar me pusieron otra bolsa encima y me desmayé. Tuvieron que despertarme, lo hicieron a golpes en las costillas en las piernas, de ahí después de esa tortura me llevaron a otro cubículo donde me pusieron a declarar lo que ellos mismos dijeron, la declaración que ellos mismos formaron y me seguían golpeando, mujeres y hombres y como yo no quería declarar paraban la grabación, me amenazaban con que tenía que decir lo que ellos mismos querían, si no, me dijeron que me iba a ir peor, que porque ya sabían dónde estaban mis hijos y que iban a ir por ellos; ahí fue donde empecé a declarar lo que decía la hoja que me dieron, porque yo no quería que le fueran a hacer algo a mis hijos. De ahí me devolvieron al cuartito después de la declaración y cuando entré un ministerial me empezó a tocar mi cuerpo y a tomarme fotos sin brasier y sin blusa y como yo me tapaba la cara me amenazaba con ponerme la chicharra. Procedieron a llevarme a los separos de fiscalía y de ahí me sacaban a seguirme torturando, como yo ya los conocía por sus tenis porque es lo único que alcanzaba a ver porqué casi siempre me tuvieron vendada y cuando me quitaron la venda fue que los reconocí y me amenazaron que no dijera que ellos habían sido que me habían torturado. Después de dos días de tortura me trasladaron al Ce.Re.So. Femenil. Aquí el médico me revisó y me encontró hematomas por todo el cuerpo, después me resultaron golpes internos que causaron las molestias en lo que viene siendo mi matriz y desde entonces mi menstruación se descontroló y me he visto muy mal por tantos golpes que me dieron en el vientre, fueron muchas las patadas y como tenía dos meses de haberme aliviado de mi hijo pequeño todavía estaba delicada...”*

35.- La versión de “B” se corrobora con la entrevista practicada el 26 de enero de 2017, con motivo de la evaluación médica realizada por el Doctor Ricardo Humberto Marquez para detectar posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes (ver párrafo 1, en relación con evidencia 19), cuando expone al médico que lo examina y valora, que al ser interceptados por agentes ministeriales, son baleados y el recibe impacto de bala por esquirlas en región occipital derecha y parietal izquierdo, es esposado y golpeado a patadas y con los puños en tórax y abdomen, piernas y brazos, dándole toques eléctricos en espalda y testículos estando mojado, poniéndole además una bolsa de plástico cubriendo la cabeza, causándole la sensación de asfixia (se transcribe en tercera persona, virtud a que así se encuentra el relato en el documento que se analiza).

36.- En el apartado de conclusiones y recomendaciones, se precisa por parte del autor de la evaluación Doctor Ricardo Humberto Márquez, en lo que respecta a “**B**”, que a pesar del tiempo transcurrido, en relación a la época en que ocurrieron los hechos, las cicatrices en región occipital y parietal son concordantes con lo descrito, no encontrándose más datos para soportar malos tratos y/o tortura, recomendando practicar una valoración psicológica, lo que fue realizado con posterioridad y se analiza en párrafos subsecuentes.

37.- Por lo que respecta a “**A**” y “**E**”, ésta evaluación no arroja resultado positivo alguno, al referir el facultativo que aunque relatan en que consistieron los actos de maltrato y/o tortura que dicen les fueron impuestos, coincidiendo en esencia con los narrados en la queja, al haber transcurrido 4 años y 9 meses, aunque estos hayan existido, a la fecha han desaparecido las huellas o vestigios de los mismos, empero se recomienda la valoración psicológica de ambos, que desde luego también se realizó al menos por lo que respecta a la segunda de los mencionados, no así por “**A**”, que manifestó que ya no era su deseo someterse a este tipo de estudios, ya que refiere que en la audiencia donde se presentó el Protocolo de Estambul emitido por la fiscalía, no fue tomada en cuenta esa prueba, considerando en consecuencia innecesario someterse de nueva cuenta a esta.

38.- En lo relativo a la valoración psicológica practicada a “**E**”, conforme a la evidencia 15, por la psicóloga Lic. Gabriela González Pineda adscrita a este organismo, en fecha 14 de julio de 2016, mediante la entrevista para la elaboración de la evaluación psicológica especializada para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes, donde mencionó que la llevaron a la parte de atrás de la fiscalía, donde le vendaron los ojos y la pasaron a un cubículo en donde la golpearon con la mano y le pusieron la chicharra para dar toques y le pusieron una bolsa, hasta que se desmayó; que la despertaron a golpes y le realizaron tocamientos de carácter sexual, mientras le decían obscenidades, poniéndole la chicharra en sus partes íntimas, en los párpados de los ojos, en la lengua y en los oídos, además de golpearla en el estómago, afirmando que al final la hicieron firmar un documento por extorsión y que si no lo hacía, iba a ir por sus hijos y los iban a matar.

39.- También, con la diversa entrevista practicada a “**B**”, por la psicóloga Lic. Gabriela González Pineda adscrita a este organismo, en fecha 6 de septiembre de 2017 para la elaboración de la evaluación psicológica especializada para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes, donde afirmó que desde el momento de su detención fue sujeto de maltrato, ya que al bajar del vehículo empezaron los policías a dispararle en los pies, por lo que le salpicaron algunas esquirlas, luego lo tiraron al piso y le dieron un rozón de bala en la nuca y lo dejaron lleno de sangre, además estando en el suelo lo golpearon con la culata del arma y en las costillas, momento que perdió el conocimiento. Que en la fiscalía los esperaban formados como quince

elementos y que al pasar lo pateaban, algunos en los testículos, que no aguantó y que se cayó; que otros le daban cloro y le pusieron una patada en la boca, además de venderle la cabeza. Continúa el relato afirmando que le daban golpes en las costillas y que le dieron toques con una chicharra en todo su cuerpo, especificando que en los glúteos y en los testículos y que vio cuando le ponían la chicharra a su esposa, al mismo tiempo que un agente le decía cosas obscenas de ella, como que estaba bien buena y que ya se la habían chingado. Que más tarde que lo llevaron a declarar ante el Ministerio Público, a quien identifica como “O”, una oficial le indicó lo que debería decir, pero como se equivocaba delante de las cámaras, las apagaban y le daban martillazos en las manos hasta que al fin firmó, ya que no aguantó los golpes y patadas en las costillas, fracturándole una. Que al llegar al CERESO, el médico no los quería recibir por los golpes que presentaban, pero que hicieron una llamada los agentes y aquel accedió a ingresarlos.

40.- De la misma manera, obran en el expediente por haberlos exhibido la autoridad en el primer oficio informativo, relacionado como evidencias 14.1 y 14.2, los informes de integridad física suscritos por la Dra. María Isabel Luna Salas, Perito Médico Legista, adscrito a la Fiscalía General del Estado, practicados a “A” y “B”, el 27 de abril de 2012, a las 19:30 horas y 19:00 horas respectivamente, en el consultorio médico de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Extorsión de la Fiscalía General del Estado en Zona Norte, apreciándose a “A”, lesiones consistentes en: “...*Enrojecimiento en la tetilla derecha, enrojecimiento en región dorsal derecha, herida cortante en región occipital derecha...*”. En tanto que a “B”, le fueron apreciadas las siguientes lesiones: “...*Herida cortante en parietal izquierdo, dos heridas cortantes en occipital, herida cortante en unión biparental (sic)...*” Refiere la médica legista que el origen de las lesiones, según relato de ambos lesionados, fue por haberse golpeado durante la detención.

40.1.- Por otro lado, al haberse omitido en informe de integridad física en lo relativo a “E”, éste fue obsequiado en copia simple por la autoridad en el informe complementario que se relaciona como evidencia 18, elaborado por la misma profesionista, en misma sede y fecha, sólo que a las 18:37 horas, donde describe las siguientes lesiones: “...*Equimosis violácea en pierna izquierda en cara exterior y posterior, refiriendo dolor en región umbilical...*”, atribuyéndolas como causa u origen, por el supuesto dicho de la persona examinada, el habérselos hecho en la troca de la detención.

41.- La misma autoridad en el informe complementario referido como evidencia 18, a requerimiento expreso del visitador instructor, exhibió copia de los certificados médicos de ingreso de los quejosos al Centro de Reinserción Social Estatal No. 3, practicados el 29 de abril de 2012, por el médico en turno adscrito al mencionado penal, cuyo nombre se ignora, apreciándose sólo una rúbrica, donde afirma que encontró en “B”, las siguientes lesiones: “...*Rozón por proyectil región occipital derecha y traumatismo en región occipital; traumatismo en región parietal izquierda y probable fractura costal*”

izquierdo...”. En tanto que a “E”, le fueron apreciadas las siguientes lesiones: “...Hematoma en ambas piernas, izquierda cara exterior y derecha cara posterior...”

41.1.- Por lo que respecta a “A”, si bien es cierto que en el libelo de cuenta, la autoridad responsable exhibe en copia simple el certificado de ingreso respectivo, también lo es que el mismo no corresponde a los hechos, ya que se encuentra descontextualizado, virtud a que fue elaborado por el Doctor José Sacramento Cruz Anduaga, médico en turno adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en sede del citado reclusorio, pero con fecha 10 de octubre de 2015, es decir, tres años y seis meses de diferencia en cuanto a la fecha de detención del mencionado, por lo que al no apreciarse ninguna lesión, no interesa al presente análisis; empero queda la duda en cuanto a la razón de porque la autoridad remite documentos que no tienen relación con los hechos que se investigan, continuándose el análisis con las diversas evidencias antes relacionadas.

42.- Por lo anterior, es que resulta presumible que los actos de tortura existieron en la forma narrada por los quejosos, documentada además en las diversas diligencias antes relacionadas y que esos actos fueron cometidos intencionalmente, con el propósito de obtener información o una confesión; de tal manera que les fueron provocados severos sufrimientos, que dejaron secuelas físicas y psicológicas, algunas de las cuales inclusive fueron apreciadas por los especialistas citados al realizar las valoraciones relativas a pesar del transcurso del tiempo, por lo que pueden ser ostensiblemente calificados como formas de tortura. Por lo que se reitera, ello pone en evidencia que ese sufrimiento se infligió intencionalmente cuando ya se encontraban sometidos en sede ministerial, al parecer con conocimiento del agente del Ministerio Público responsable de la investigación en la primera etapa.

43.- Con el propósito de vincular en una relación de causa-efecto, la versión de los quejosos en el sentido que fueron sujetos a agresiones por elementos del Estado, al considerarse compatibles las lesiones que presentan, con la afectación emocional que refieren, en fecha 14 de julio de 2016 y 6 de septiembre de 2017 respectivamente, se recabaron los Dictámenes Psicológicos Especializados para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Denigrantes elaborados por la Lic. Gabriela González Pineda, 6217577, Psicóloga adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, practicado en las personas de “E” y “B”, donde se aplicaron las siguientes baterías de pruebas, exámenes y test, resultando conclusiones que interesan al presente análisis, con la siguiente estructura:

I.- METODOLOGÍA Y TECNICAS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS:

- A) Lectura de queja presentada.
- B) Entrevista directa.
- C) Observación clínica.

D) Aplicación de instrumentos psicológicos.

II.- EXAMEN MENTAL Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.

A) Mini Examen del Estado Mental.

B) Escala de Gravedad de Síntomas de Estrés postraumático (Echeberúa, Corral Amor, Zubizarreta y Sarasúa

C) Escala de Ansiedad (Hamilton).

D) Entrevista Internacional mini versión en Español L. Ferrando J. Bobes, J Gilbert.

III.- RESULTADOS OBTENIDOS. En relación con “E”:

En el Examen Mini del Estado Mental, la entrevistada presenta una adecuada capacidad cognoscitiva considerando los resultados (puntuación =26) en el rango de estado mental normal, acorde a su nivel de estudios.

En la escala de Ansiedad de Hamilton (puntuación=08) en esta prueba se encuentra un cuadro ansioso con un nivel de intensidad leve.

En la escala de gravedad de síntomas de Echeburúa, esta prueba muestra que NO cumple con los criterios del trastorno por estrés postraumático (Puntuación final=16).

En la entrevista internacional Mini que explora principales trastornos psiquiátricos, se concluye que NO cumple con los criterios para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor.

IV.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- La examinada “E” presenta datos de alteración emocional consistentes en síntomas de re experimentación, tales como recuerdos y sueños desagradables, recurrentes e intrusivos del suceso, incluyendo imágenes, pensamientos o percepciones; malestar psicológico y reactividad fisiológica al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan algún aspecto del suceso; así como la evitación como sobreesfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos, actividades, lugares o personas que provocan el recuerdo del evento disminución marcada del interés por las cosas o de la participación en actividades significativas, sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto a los demás limitada en la capacidad afectiva derivados de la victimización sufrida a través de la exposición a varios acontecimientos caracterizados por daño a su integridad, considerándose que los elementos anteriormente descritos se encuentran en consonancia y guardan relación directa con los hechos descritos.

44.- Mismo EXAMEN MENTAL y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA fue practicado por la citada profesionista a “B”, estableciendo que se encuentra en un estado mental normal, con un cuadro ansioso con un nivel de intensidad moderada, cumpliendo con los criterios para el diagnóstico de estrés postraumático, con leve perturbación en el estado de ánimo,

sin cumplir con los criterios para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, concluyendo en lo siguiente: PRIMERA.- El examinado “B”, presenta datos compatibles con trastorno por estrés postraumático, derivado de la victimización sufrida a través de la exposición a diversos acontecimientos caracterizados por daño a su integridad; mostrando síntomas de re experimentación, evitación y aumento en la activación provocando un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, considerándose que los elementos anteriormente descritos guardan relación directa con los hechos que nos ocupan. SEGUNDA.- Recomienda la revisión y atención médica, debido a las alteraciones físicas que el entrevistado refiere sufrió al momento de su detención y la atención a sus posibles secuelas; y, TERCERA.- Que el entrevistado sea atendido en terapia por un profesional del área clínica de la psicología, con la finalidad de restaurar su estado emocional, con un pronóstico reservado de 32 sesiones psicoterapéuticas, una por semana, considerando que el costo por sesión es de aproximadamente 600 pesos en algunos consultorios psicológicos de la ciudad.

45.- La circunstancia de que los citados dictámenes de evaluación psicológica fueran elaborados, uno cuatro años y medio y otro traspasando los cinco años, después de que tuvieron lugar los hechos denunciados y que, en consecuencia, no hubiese evidencia física de las lesiones de las que se duelen los quejosos, no lo priva de eficacia convictiva en grado de presunción, toda vez que la afectación emocional y estrés presentado a esas fechas, se correspondía con la relatoría de los hechos de la queja, haciéndolos compatibles con los daños que presuntamente recibieron al momento de estar a disposición de los agentes de policía respectivos, según conclusión a la que llegó la Lic. Gabriela González Pineda, autora de ambos dictámenes, que administrados con las relatorías de los quejosos y los certificados médicos antes desarrollados, generan presunción fundada en el sentido de que les fueron infligidos los tratos crueles e inhumanos de los que se duelen, además que tampoco pueden desestimarse sus versiones, virtud a que la reclamación se dio en sede judicial desde el momento mismo en que fueron presentados ante esta.

46.- En base al caudal de evidencias relacionadas, tenemos que en el ámbito internacional de los derechos humanos, los instrumentos que proscriben la práctica de la tortura y garantizan a las personas su cumplimiento, tenemos que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, prohíben expresamente la tortura; del mismo modo, varios instrumentos en el ámbito regional establecen el derecho a no ser sometido a tortura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, contienen prohibiciones expresas de tortura.

47.- Estos Instrumentos Internacionales establecen determinadas obligaciones que el Estado Mexicano debe respetar, para asegurar la protección contra la tortura, entre ellas, garantizar que:

- Las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura (artículo 12 de la Convención contra la Tortura, principios 33 y 34 del Conjunto de Principios sobre la Detención, y artículo 9 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura).
- Toda víctima de tortura obtenga reparación e indemnización adecuadas (artículos 13 y 14 de la Convención contra la Tortura, artículo 11 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura, y párrafos 35 y 36 de las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos).
- El o los probables culpables sean sometidos a un procedimiento penal, o a una investigación, en caso de demostrar que cometieron un acto de tortura.
- Si se considera que una denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante está bien fundada, el o los probables autores serán sometidos a los procedimientos penales, disciplinarios o de otro tipo que correspondan (artículo 7 de la Convención contra la Tortura, y artículo 10 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura).

48.- Así, el derecho humano que protege la integridad y seguridad personal que incluye el derecho a no ser objeto de tortura, deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su fuente convencional, en el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refieren a la obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

49.- De tal manera, el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado; por lo que su protección parte de la afirmación de la existencia de ciertas particularidades inviolables de la persona que no pueden ser legítimamente menoscabadas por el ejercicio del poder público.

En consecuencia, es obligación de las autoridades prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por dichos instrumentos legales y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho vulnerado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

50.- Los estándares en relación con el derecho a no ser objeto de tortura son claros en cuanto a que las autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de ella, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, en cuanto a que es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional,

es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones, debido a su gravedad y a la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana

De tal manera, conforme a lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ² y ³ se está ante un acto de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) se cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos.

51.- En tanto que la doctrina ha establecido que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para: a) obtener una confesión o información; b) para castigar o intimidar; y, c) para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona.

52.- Por ello, se ha establecido que por la trascendencia de afectación al derecho humano a la integridad personal, con motivo de la comisión de actos de tortura, se requiere que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que, presuntamente, se obtuvieron con motivo de actos de tortura.

Afirmación que se corrobora con la tesis aislada número 1ª. CCVII/20014 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA".⁴ Que refiere que cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos sobre la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, la que tendrá como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables.

53.- Al respecto, el máximo órgano judicial de la Nación por conducto de la Primera Sala ha establecido que la tortura se deberá investigar como violación a derechos humanos y como delito,⁵ según tesis de jurisprudencia del siguiente rubro: 1a. CCVI/2014 (10a.) Tortura. Su sentido y alcance como prohibición constituye un derecho absoluto, mientras que sus consecuencias y efectos se producen tanto en su impacto de violación de derechos humanos como de delito.

² Casos Inés Fernández Ortega vs. México. (pag. 93) y Valentina Rosendo Cantú vs. México. (pag. 83).

³ Caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sentencia 26/nov/2006, CrIDH, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 166, 174 y 192.

⁴ Consultable en la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo I, mayo de 2014 y en el Semanario Judicial de la Federación del 23 de mayo de 2014.

⁵ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I. Registro: 2006484.

54.- Además en diversos precedentes el Alto Tribunal ha establecido que no se deben desestimar los alegatos de tortura, sino que en cualquier caso debe darse vista al Ministerio Público competente para el efecto de que inicie la investigación penal correspondiente, de forma que se determine la existencia de la tortura como delito en relación con los agentes estatales involucrados, con absoluta independencia de que en el procedimiento penal respectivo y en su caso, en el juicio de amparo directo se hayan alegado como violaciones sustanciales del procedimiento que hagan que se excluya del material probatorio la declaración obtenida mediando la tortura.

55.- Expuesto lo anterior, en atención a lo que prevé el Protocolo de Estambul (Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes), en lo relativo a la tortura que aducen los aquí quejosos de la que fueron objeto, ha de señalarse, se entiende por tal:

"Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherente o incidentales a éstas."

56.- El Estado en su condición de garante de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, es responsable del respeto a la integridad de toda persona que esté bajo su custodia. Así, la persona que es detenida en un estado normal de salud, si el Estado no tiene explicación satisfactoria y convincente que desvirtúe su responsabilidad, existe la presunción de considerar responsable al Estado por lesiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos.^{6, 7}

⁶ López Álvarez vs, Honduras, párr. 87. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf.

⁷ Niños de la Calle vs. Guatemala, párr. 135. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf.

57.- Los actos de tortura sufrida por “**A**”, “**B**” y “**E**”, constituye un atentado al derecho a su integridad física y psicológica, así como a su seguridad y dignidad personal, transgrediéndose además los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y quinto, 19, último párrafo, y 22, párrafo primero, constitucionales; y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto es, que toda persona privada de la libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

58.- También se incumplieron los artículos 2.1, 6.1 y 6.2 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Cruelles, Inhumanos y Degradantes y el numeral 6 del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquiera Forma de Detención o Prisión”, que establece que ninguna persona que se encuentre en cualquier forma de detención o prisión será sometida a tratos crueles y no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de éstas.

59.- Finalmente, los artículos 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, advierten, entre otros aspectos, que “protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”, y “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden superior o circunstancias especiales, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, entre los cuales se señalan el derecho a la integridad y seguridad personal.

60.- En el caso a estudio es de relevancia trascender que se tuvo conocimiento de los hechos por parte de este organismo, además de la queja formulada por los agraviados de marras, por el comunicado del Juez del Tribunal Oral en materia Penal, del Distrito Judicial Bravos, ante cuya jurisdicción fueron procesados los quejosos, por lo que este organismo, aparte de radicar la queja respectiva, proporcionó por medio de personal técnico, los dictámenes y/o evaluaciones psicológicas y médicas con la acentuación de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes, antes aludidos, virtud a que la autoridad de amparo, dejó sin efectos la audiencia de debate de juicio oral “**M**”, ordenando la práctica del Protocolo de Estambul, ante la probabilidad de haber sido expuestos los imputados “**A**” y “**B**” a actos de tortura, cuyo reclamo lo hicieron desde sus primeras declaraciones.

61.- Por ello, la cuestión ya fue abordada por la autoridad judicial federal en lo concerniente a probable violación trascendental a las reglas del procedimiento, como violación al derecho humano al debido proceso de los mencionados, con las consecuencias antes anotadas, quedando pendiente el análisis de la tortura como delito, así como responsabilidad administrativa de los elementos del estado que participaron en

los hechos, en los términos expuestos en los precedentes aludidos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

62.- Es en base a lo anterior que la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado, en el informe primario referido en el párrafo 5, alude que con motivo de éstos hechos, en fecha 28 de marzo de 2014, mediante oficio No. 201/14, instruyó a la Coordinadora de la Unidad de Investigación en Delitos Contra el Adecuado Servicio Público, procediera a la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de tortura, amenazas y robo, en perjuicio de “**A**” y “**B**”, agregándole el de violación en perjuicio de “**E**”, sin que desde luego se cuente con más información en lo relativo a este tema, ignorando si se integró la carpeta de investigación respectiva, además del seguimiento que legalmente proceda.

63.- Es por ello, que al no proporcionarse por la autoridad copia de la carpeta de investigación respectiva, que tampoco informa sobre el trámite de la misma, ni el resultado de esta; es decir, no se tiene conocimiento sobre los datos conclusivos o determinación final de dicha indagatoria, si fue realizada en forma exhaustiva, si se allegaron de todos los elementos de prueba suficientes para determinar la probable responsabilidad de los agentes captores y de investigación, en sí, se carece de la información necesaria para verificar si se le ha dado el trámite legal respectivo y en su caso, la definición sobre la judicialización o no de la carpeta de investigación, así como saber, si se le ha dado a los denunciados, hoy quejosos, el tratamiento de víctimas del delito que por imperativo constitucional establecen diversos dispositivos de la Ley General de Víctimas, así como la Ley de Víctimas del Estado, concretamente la reparación integral del daño, que se compone por los conceptos de rehabilitación, satisfacción y no repetición.⁸

64.- Por el contrario, la Fiscalía Especializada en la materia, considera que por el sólo hecho de haberse iniciado la investigación respectiva por el delito de Tortura y otros en contra de los servidores públicos señalados, -lo que desde luego no se encuentra demostrado-, es suficiente para tener por solventada la reclamación, cuando refiere en el capítulo de conclusiones, que: *“...Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes de queja iniciados por supuesta tortura, abuso de autoridad o uso ilegal de la fuerza pública, en los cuales ya se dio inicio a la investigación correspondiente por parte del Agente del Ministerio Público, y se hizo del conocimiento (mediante informe correspondiente) del visitador que tramita la misma, se solicita, en base a los numerales previamente referidos, sea ordenado el archivo de la referida queja, por haberse dado solución a la misma durante el trámite...”* [sic].

⁸ Recomendación 12/2017 emitida el 24 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Párrafo 192 y siguientes.

65.- Por parte de este órgano garante, se considera que con el propósito de cumplir con la obligación del Estado que impone el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, aplica la consecuencia, que informa que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, lo que no se logra con el sólo inicio de la investigación, sino que esta debe ser de una manera profesional, imparcial, objetiva e independiente, que garantice a los afectados el derecho humano de acceso a la justicia y que concluya de una manera satisfactoria, y en caso de que se concluya en el no ejercicio de la acción penal, por no acreditarse los hechos constitutivos del delito de Tortura, se les notifique a éstos en forma fehaciente y se les designe un asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, a efecto de que se proceda al control judicial mediante la impugnación a que se refiere el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

66.- Abordando la siguiente cuestión, en cuanto a que ambos quejosos varones se duelen del desposeimiento de diversos bienes muebles, consistentes en un vehículo automotor, enseres domésticos e inclusive mascotas de crianza para la venta, que afirman los sustrajeron los agentes investigadores cuando ya se encontraban en detención, al irrumpir en sus correspondientes domicilios, sin que hasta la fecha de la queja los hayan recuperado o al menos tener la información pertinente en cuanto a la situación legal de los mismos, ya que no se establece si fueron asegurados por alguna relación con el delito que se imputa, cuando afirma “**A**”, que: “...nos pidieron el domicilio los de la fiscalía y fueron y nos robaron a nuestras casas todos los muebles, sacaron las televisiones, la sala; yo vendía cachorros y se los llevaron todos ...” (sic), mientras que “**B**”, al respecto afirma que “...nos dijeron: ya les dejamos sus casas vacías, hasta los perros”, a mi hermana también la golpearon, le decían que era una marrana igual que yo, robaron todos los muebles en mi troca Ram verde 98 cabina y media, mis perros san bernardo, mini toy y un pit bull, mi carro Mitsubishi 2001, eran dos oficiales antirrobo...”

67.- En ese sentido, es preciso que la autoridad investigadora que le dio seguimiento a la detención de estos y que integró la carpeta de investigación “**I**” en su contra, proporcione toda la información relativa a los bienes, para que en su momento, se realice la devolución a quien legalmente acredite la legal posesión de los mismos, además de justificar si su aseguramiento fue por que pudiera servir como medio de prueba en el delito que se les imputa, así como si al dictar ésta medida la policía investigadora, así como el ministerio público se sometieron estrictamente al supuesto y al procedimiento que establecen los numerales 249 y 250 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado al momento de los hechos que se analizan.

68.- Para concluir el análisis de manera exhaustiva en el orden planteado por los quejosos, cuando se duelen que la autoridad judicial de la causa ordenó el arraigo domiciliario por cinco meses y que ésta modalidad de prisión preventiva se estaba ejecutando por parte de la Fiscalía Especializada en la materia en el Centro de Arraigos de ciudad Juárez, hacía ya un mes y medio, sin que la autoridad haya proporcionado información alguna del caso, ni mucho menos anexado constancias judiciales que justificaran su actuación, según el reclamo de “**A**”, que afirma: “...*Del Cereso nos trajeron para acá a arraigos porque el juez así lo determinó, 5 meses de arraigo domiciliario y aquí nos tienen ya llevamos un mes y medio, también quiero que se investigue eso porque el Juez dijo que era arraigo domiciliario y de hecho ya fueron a revisar nuestras casas y no nos han dicho nada...*” [sic].

68.1.- Al respecto “**B**”, se dolió en los siguientes términos: “...*Yo quiero saber qué pasa con nosotros, porque el juez dijo que nos pusieran en arraigo domiciliario y nos trajeron aquí a arraigos y no nos han avisado nada del arraigo domiciliario que fue lo que ordenó el juez, es lo que yo también quiero saber ¿por qué nos tienen aquí todavía?...*” [sic].

69.- Se reitera que en cuanto a éste punto, la autoridad responsable no proporcionó información de ninguna especie, por lo que sólo subsiste el reclamo de los impetrantes; empero de las constancias del expediente se advierte que las quejas relativas a “**A**” y “**B**”, fueron recibidas el 31 de mayo de 2016 en el referido Centro de Arraigos, en tanto que las evaluaciones médicas relacionadas como evidencias 16 y 19, fueron elaboradas en la misma sede, el 13 de diciembre de 2016 y el 26 de enero de 2017, de donde puede concluirse con meridiana claridad que a esas fechas si se encontraban internos en dicho establecimiento.

70.- Al efecto, de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las únicas posibilidades legales de detener a una persona son, de acuerdo con la ley, la urgencia, la flagrancia y la ejecución de una orden de aprehensión, el arraigo no implica ninguna de ellas, por lo cual, si este se lleva a la práctica, es violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde luego cuando se realiza para efectos de investigación, en tanto se recaban las pruebas para poder presentar al imputado ante la autoridad judicial, ya que priva a aquel de la libertad sin derecho a hacerlo, en tanto que violenta los principios de garantía o control judicial e intermediación judicial, que afecta gravemente el derecho al debido proceso.

71.- En el presente caso, los quejosos se duelen de un arraigo que surge durante la investigación formalizada, cuando después de haberse formulado imputación por la comisión de un delito grave, antes de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, conforme a las reglas del derogado Código de Procedimientos

Penales en el Estado, e impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, transcurrido el término de dos años sin que se hubiere dictado la sentencia respectiva, con lo que se prolonga la prisión preventiva como medida cautelar, violentando los derechos de Acceso a la Justicia, Seguridad Jurídica y Legalidad contenidos en los artículos 17 y 20 Apartado A, fracciones VII y IX segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

72.- Por lo que suponiendo, aún sin realizar un escrutinio estricto en cuanto a que el arraigo en cualquiera de sus especies es inconstitucional e inconvencional, por ser violatorio de los derechos humanos aludidos, y aceptando aquella modalidad que se estableció en la fracción VI del numeral 169 del citado Código de Procedimientos Penales del Estado, la prisión preventiva en tratándose de delitos graves, podría sustituirse por “arraigo en domicilio”, sin que de ninguna manera, ni bajo circunstancia alguna, la autoridad responsable de la ejecución de medidas judiciales pudiera cambiar el lugar de ésta, simulando el cumplimiento de la ley, bajo el argumento que no existen condiciones de seguridad para su implementación. Para ilustración, baste el precedente sentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en ésta ciudad.⁹

73.- Al efecto, para matizar el cumplimiento del imperativo constitucional, contenido en el artículo 19 de la Carta magna, la legislación secundaria en la materia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante decreto de reformas a éste y otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2017, adicionó el segundo párrafo al artículo 165, para armonizarlo con el diverso 167, por efecto del Quinto Transitorio,¹⁰ que establece la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva, para adecuarse a las nuevas disposiciones del nuevo sistema penal

⁹ amparo indirecto en revisión 337/2015, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la sesión de 4 de diciembre de 2015, que en el considerando quinto resolvió:

“En ese contexto, es dable colegir que la resolución reclamada en el juicio de origen, de once de mayo de dos mil quince, en la que se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva, por la de arraigo, misma que habría de tener verificativo en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, conocido como C-4, en el área destinada para tal efecto, como lo consideró el Juez a quo, no resulta apegada al artículo 169, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, pues este numeral, de ningún modo faculta para que el arraigo se ejecute en un lugar distinto al que en él se establece, a saber “... en su propio domicilio o en el de otra persona,...”, considerar lo contrario, conllevaría permitir que la autoridad a pretexto del arraigo, en realidad prolongue la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual se desvirtuaría la figura del arraigo”.

¹⁰ Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculcado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.

acusatorio adversarial y sustituirla por arraigo en el domicilio, hasta el dictado de la sentencia respectiva.

74.- En este sentido, mediante Recomendación No. 29/17 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fecha 14 de agosto de 2017, dirigida precisamente al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma Entidad Federativa, aborda con meridiana claridad el tema de arraigos en establecimientos ad-hoc, sustituyendo al arraigo en domicilio que autoriza la ley, en cuyo instrumento les solicita a ambos, no sólo que se tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el utilizar instalaciones “acondicionadas” o “habilitadas”, para llevar a cabo medidas privativas de libertad que no sean en los centros de reinserción social establecidos para tal efecto, sino además para que se puedan revisar todos los casos de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los Centros de Arraigo de Chihuahua y de ciudad Juárez, respetando los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los criterios, normas y leyes nacionales e internacionales, así como para que se prevea la utilización de la prisión, de conformidad con lo previsto en la ley y no en espacios “habilitados” o “acondicionados”, adoptando para el caso del “resguardo domiciliario” los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales respectivos. Al efecto se transcriben los párrafos 33, 36, 48, 57, 62 y 65 de la Recomendación de maras, por ser los puntos torales en que se sustenta ésta. ¹¹

¹¹ **33.** De manera específica, se advierte que desde 2010 en el Estado de Chihuahua se ha sustituido la medida cautelar de prisión preventiva por la de “Arraigo en el Domicilio”, la cual se materializó en espacios “habilitados” por la autoridad distintos al domicilio del imputado, lo que no es acorde al citado artículo 169, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y vigente en la época de los hechos, ya que éste no autoriza que la medida cautelar pueda llevarse en lugar distinto al domicilio del imputado o de otra persona, como aconteció en estos casos.

36. Consecuentemente, resulta claro que el “Arraigo en el Domicilio”, tal y como se ha venido aplicando en el estado de Chihuahua, es una forma de prolongar la prisión preventiva, lo cual se contrapone con el citado artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IX, segundo párrafo.

48. La creación y funcionamiento de los Centros de Arraigo del Estado de Chihuahua se encuentran al margen de la ley, puesto que la Fiscalía General en ningún momento ha comprobado jurídicamente la creación de dichos establecimientos, mediante decreto u ordenamiento jurídico que les dé sustento legal. Aunque la Fiscalía General pretende sustentar su actuación en el *“Manual de Procedimientos para los Centros de Arraigo de la Policía de Custodia y Medidas Judiciales”*, debe decirse que a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, la operación de los centros de arraigo propiamente dicho corresponde única y exclusivamente a la Federación en materia de delincuencia organizada, como lo establecen los artículos 16, párrafo octavo y 73, fracción XXI, inciso b), de nuestra Carta Magna y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

57. En el caso de quienes se encuentran sujetos a la medida cautelar de “Arraigo en el Domicilio” en los Centros de Cd. Juárez y Chihuahua los cuales, posterior a la imposición de esa medida se les condenó por lo que promovieron recurso de casación, conforme al capítulo IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, y han pasado más de 2 años aproximadamente sin que se les resuelva el mismo, es menester señalar que en su caso se violentó su derecho de acceso a la justicia pues el ordenamiento legal en cita señala como término para la resolución de tal medio de defensa el de tres días posterior a la audiencia, término en que deberá emitir el fallo respectivo, lo que no acontece ya que en los casos analizados se advierte que se excede el plazo antes invocado.

62. En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional considera que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, debe revisar todos los procesos penales y los recursos correspondientes a los casos análogos a los que se estudiaron,

75.- En base a lo anterior, en el sistema no jurisdiccional de protección de Derechos Humanos, cuya responsabilidad en el ámbito estatal recae en este organismo, en cumplimiento a los imperativos contenidos en los artículos 1º, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1 y 2, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, que establecen la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo anterior también de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, en relación con el numeral 14 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

76.- Desde luego que las consideraciones relativas al “arraigo domiciliario” que decretó la autoridad judicial y que no fueron observadas por la autoridad administrativa en la materia, aplican siempre y cuando a la fecha subsistan las condiciones aludidas y no se hayan modificado, ya sea por haber cambiado la situación jurídica de los imputados, al haberse emitido la sentencia respectiva, ya porque se hayan adoptado las medidas pertinentes contenidas en la recomendación del ombudsman nacional, virtud a que los casos de los quejosos se encontraban en los supuestos referenciados en el citado instrumento protector, cuyo análisis y revisión era parte de la misma.

77.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito por los artículos 2 inciso E y 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a efecto de que se inicie procedimiento dilucidatorio de responsabilidad administrativa y penal, de una manera exhaustiva en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos a que se contrae la presente, debiendo enviar a este organismo, pruebas de su cumplimiento.

78.- Por último, a efecto de que proceda a activar los procedimientos de reparación integral, en los componentes antes especificados, que se establecen en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, con el propósito de que sean reparados los daños

tomando las medidas que correspondan para que se resuelva su situación dentro de los plazos constitucionalmente establecidos y con criterios de razonabilidad, atendiendo a la complejidad de cada caso.

65. Esta Comisión Nacional considera que las autoridades que han conocido de los casos de las personas privadas de libertad en los Centros de Arraigo del Estado de Chihuahua, se apartaron de lo establecido en los artículos 1º, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 20, inciso B fracciones VII y IX, párrafo segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178, 181, 184, 187, 188 y demás relativos, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, fracciones I, XVII y XXXIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 65, 285, 287, 300, 318, 325, 417, 418, 426 del Código de Procedimientos Penales; y 3, 20, 54, fracción VI, 82, fracción II y 99, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

por tal proceder y evitar los actos de repetición, en los términos que se contienen en el párrafo 75 anterior.

79.- Ello en virtud de que a la luz de los principios que orientan al sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, se encontraron evidencias suficientes para tener por acreditadas violaciones a los derechos humanos de los quejosos, en la especie del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la seguridad e integridad personal en su modalidad de tortura y de acceso a la justicia, en los términos especificados; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente emitir las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S:

PRIMERA.- A usted, Mtro. César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado, gire sus instrucciones a efecto de que se inicie procedimiento dilucidatorio de responsabilidad, en relación con el actuar de los elementos de la Fiscalía involucrados en el presente asunto, tomando en cuenta las evidencias y razonamientos esgrimidos, en el cual se valore además, la procedencia de la reparación integral del daño, debiendo enviar a este organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEGUNDA.- A usted mismo, sirva girar instrucciones para que se lleve a cabo la integración hasta la conclusión que conforme a derecho corresponda de una investigación exhaustiva por probables actos de tortura en contra de “A”, “B” y “E”, en el que se tomen en consideración los argumentos y evidencias analizadas en la presente determinación.

La presente recomendación de acuerdo con lo señalado en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y con tal índole se encuentra en la Gaceta de este Organismo, y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración sobre una conducta irregular, cometida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de la dependencia, competente para que dentro de sus atribuciones apliquen las sanciones conducentes y subsane la irregularidad de que se trate.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden en modo alguno desacreditar las instituciones, ni constituye una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario deben ser concebidas, como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren

autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstas se sometan a su actuación a la norma jurídica que conlleva al respeto a los Derechos Humanos.

En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trata informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vigente en el Estado de Chihuahua.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E

M.D.H. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE

c.c.p.- Quejosos, para su conocimiento.

c.c.p.- Lic. José Alarcón Ornelas, Secretario Técnico-Ejecutivo de la CEDH.